

Las controversiales elecciones de Nicaragua

Lina Pohl*

Hablar en este momento de la situación en Nicaragua es dramático, sobre todo para aquellos que lo recuerdan desde el fervor y la solidaridad que manifestaron ante un movimiento revolucionario y democrático que propició el aplastamiento de una de las más atroces dictaduras en América Latina. En contraste, la misma generación que luchó en contra de esta dictadura coloca a uno de sus líderes en igualdad de condiciones que el dictador. Lo que para muchos fue esperanza ahora se convierte en frustración, y lo que para muchos significó valores de justicia, democracia y libertad, ahora se convierte en arbitrariedad, injusticia e intolerancia.

La historia de Centroamérica parece estar comenzando un nuevo ciclo: el del ascenso y la perpetuación de gobiernos de izquierda. A diferencia del pasado, la llegada al poder de fuerzas políticas no tradicionales, en este caso que van de centro-izquierda a la izquierda- se da por medio de elecciones y no a través de sangrientos golpes de Estado ni de rebeliones.

Con la única excepción de El Salvador, en la actualidad desde Guatemala hasta Panamá, gobiernan partidos que pertenecen o se les considera socialdemócratas. Unos más y otros menos de izquierda. El mapa político centroamericano, sin embargo, es diferente de como estaba compuesto hace una década, en la que estaban en el poder partidos conservadores y neo-liberales. También se les llamaba gobiernos del “Consenso de Washington”.

En este contexto se dan las elecciones municipales en Nicaragua, donde la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en enero de 2007, se consideró como el retorno de la Revolución Popular Sandinista que imperó en 1979-1990. Hay que recordar que aquella revolución que destronó a una de las dictaduras más oprobiosas de Latinoamérica, generó una guerra civil impuesta desde Washington, un descalabro económico y una fractura grave en la sociedad.

Después de una década de “período revolucionario”, a través del sufragio en 1990 Nicaragua inició un “rumbo democrático”: tres gobiernos derechistas se sucedieron consecutivamente, hasta que Daniel Ortega, impulsado por el FSLN gana las elecciones en noviembre de 2006 y retorna a la presidencia en enero del 2007.

Antes, durante y después de los comicios municipales del 9 de noviembre de 2008, el proceso y todo el sistema electoral han estado en el “ojo del huracán”, tanto en Nicaragua como en el extranjero.

Los resultados concretos

Quizás nunca un proceso electoral intermedio o de municipalidades habría de generar tantas contradicciones, confrontaciones y divergencias. Al parecer la tirantez se expresa debido a que la oposición consideró estas elecciones como un plebiscito o referéndum sobre el gobierno de Daniel Ortega después de más de un año de haber llegado al poder.

Otra de las causas de la polarización fue la tesis lanzada, también desde la oposición, acerca de que si Ortega ganaba las elecciones municipales, legitimaría su poder con lo cual podría ejecutar reformas constitucionales a fin de buscar el mecanismo de la reelección presidencial, por el momento prohibida en esta nación centroamericana.

Lo cierto es que el FSLN ganó, según el fallo final del Consejo Supremo Electoral (CSE), 105 alcaldías de 146 que estaban en disputa; el Partido Liberal Constitucionalista obtuvo apenas 37 municipalidades y un partido minoritario, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obtuvo cuatro. Además el FSLN obtuvo 13 de las 16 cabeceras departamentales o capitales provinciales.

La prenda mayor de estas elecciones fue Managua, la capital. Por dos motivos: lo que significa la capital misma, en la que están concentrados todos los poderes del Estado, pero además, porque el rival del FSLN —que lanzó al tricampeón mundial de Boxeo, Alexis Argüello—, fue el banquero y ex canciller Eduardo Montealegre, derrotado por Ortega en las presidenciales de 2006.

Por doquier la simbología era de rivalidad y confrontación. Por primera vez en años el PLC se había unificado alrededor de Montealegre (que fue uno de los que encarceló al ex-presidente Arnoldo Alemán); y al que se le sumaron sectores disidentes del sandinismo, empresarios y representantes de las capas medias, temerosas y creyentes de que Ortega esté refundando una “nueva dictadura”. Era la lucha de “todos contra Ortega”.

Complicado escenario

La situación es en extremo delicada ya que el Consejo Superior Electoral (CSE) de Nicaragua no admitió que los comicios fueran observados por entidades locales e internacionales independientes, como usualmente lo había hecho Transparencia y Ética, el Centro Carter —que encabeza el ex-presidente estadounidense Jimmy Carter— o la Organización de Estados Americanos (OEA). De tal suerte que la oposición tiene cuentas que no corresponden con las oficiales, pero no se pudiera decir que sean totalmente creíbles, como evidentemente tampoco son las oficiales.

Washington anunció la medida de congelar los fondos de la Cuenta de los Retos del Milenio (CRM), unos 65 millones de dólares, lo que el gobierno de Ortega consideró un “chantaje”. “Es absolutamente inexplicable e injerencista venir a tomar decisiones desde la perspectiva de la inversión, desde la perspectiva de la cooperación, sobre temas exclusivos de los nicaragüenses”, aseveró el secretario de Relaciones Económicas y Cooperación de la Chancillería nicaragüense, Valdrack Jaentschke.

Pero John Danilovich, director ejecutivo de la CRM, fue tajante: “Elecciones libres y justas son una piedra angular de esto”. No obstante, Jaentschke en declaraciones a una radio local dijo que el objetivo de Washington es “desestabilizar” a Nicaragua y venderle al mundo “una imagen negativa del presidente Daniel Ortega”. Agregó que el gobierno nicaragüense no se muestra sorprendido por la decisión y recordó que esa medida es una violación a los acuerdos establecidos entre Nicaragua y Estados Unidos.

Por su parte, la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, reiteró su “preocupación por los acontecimientos en Nicaragua, tras las elecciones locales del 9 de noviembre”, por lo que se comunicó con el canciller Samuel Santos para expresarle que están dispuestos a apoyarlos con los recursos necesarios, en aras de respaldar “las peticiones de transparencia de los resultados electorales y el respeto escrupuloso del sufragio de los nicaragüenses”.

“Si esto requiriera un recuento de votos, una revisión o, incluso, una repetición del proceso (electoral), la Comisión está dispuesta a apoyar al Gobierno de Nicaragua con todos los medios a su disposición”, precisó Ferrero-Waldner.

“Considero de extrema importancia que una solución sea encontrada en el marco interno nicaragüense, dentro del respeto de la legalidad, pero también atendiendo a los principios elementales del funcionamiento de la democracia y a la necesidad de restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas”, finalizó la funcionaria europea.

La lucha actual del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) es para que se anulen los resultados electorales y se llame en enero próximo a un nuevo proceso que esté supervisado. Hasta el momento tales gestiones han chocado con la posición sandinista que reclama el proceso como legítimo.

Más allá de las consecuencias sobre las elecciones, en Nicaragua la incertidumbre y la desconfianza se han sembrado, lo que implica una agudización de la polarización política. El resultante es producto directo de un pacto político que establecieron por algunos años el ahora presidente Daniel Ortega con el ex-presidente Arnoldo Alemán, a través del cual se repartieron las instituciones del Estado y los poderes políticos.

Este proceso ha estado acompañado de un ataque constante del gobierno sandinista a la sociedad civil en general, pero en particular, con mayor fuerza, a las organizaciones ligadas al trabajo de “incidencia política”, transparencia, democracia y género.

Para la HBS, el tema de democracia es un tema central. De acuerdo a nuestra perspectiva, las elecciones en Nicaragua, más que tomar el pulso al gobierno de Daniel Ortega, se han convertido también en un termómetro que mide la fragilidad de la democracia en Nicaragua. Estas recién pasadas elecciones han aumentado el descrédito de la política y los políticos.

El FSLN, con su estilo agresivo, su negativa a la observación electoral y su discurso en muchos aspectos más propio de la derecha que de la izquierda democrática —en particular con su ataque a las mujeres y a los medios de comunicación— ha sido un estímulo para

movilizar a importantes sectores de la ciudadanía, decepcionados de la política pero de amplias convicciones democráticas, a un voto “en contra de Ortega a cualquier costo” y no a favor de una propuesta democrática convincente, ni mucho menos estructurada, entre otras cosas porque fue delineada en medio de una polarizante campaña electoral.

Pero, por otro lado, el voto contundente a favor de la opción sandinista que encabeza Daniel Ortega advierte sobre los riesgos de ignorar o minimizar las relaciones existentes entre democracia y economía, sobredimensionando, como lo hizo la oposición, una cultura ciudadana a favor de la democracia, en un país en donde la pobreza supera el 50% de la población.

Ciudadanización pendiente

Para construir una democracia ciudadana es indispensable la política. Pero es preciso que la política sea relevante, que proponga caminos para abordar los principales problemas de Nicaragua, que sea un proyecto incluyente, y no un proyecto de “oposición a ...”, como ocurrió en estas últimas elecciones. Esto se construye desde lo estatal, pero también desde la sociedad civil.

Los espacios conquistados por la sociedad civil en Nicaragua han sido fundamentales para impulsar los frágiles procesos de democratización, no sólo a través de la ampliación del espacio público con mecanismos y modelos de participación ciudadana, sino también en la expresión de demandas ciudadanas que han generado la saludable y creciente expresión de la diversidad.

Lo cierto es que Ortega capitaliza por el momento dos grandes procesos: el descontento popular por el impulso del neoliberalismo de los gobiernos anteriores, así como “la herencia” de la revolución, consistente en la vigencia de organización y conciencia social, de ahí que Nicaragua no se pueda comparar a procesos como los que existen en El Salvador, Guatemala y Honduras.

El futuro no es tan auspicioso ni prometedor. Ortega podría hacer una mala lectura de su triunfo. Quizás incluso fortalezca su forma arbitraria de gobernar, con lo cual pudiera desencadenar una “represión política” contra cualquier tipo de disidencia.

Serán las organizaciones de la sociedad civil y las agrupaciones políticas con opciones y pensamiento democrático las que deben estructurar su estrategia de lucha que las lleve a delinear correctamente las prioridades y la estrategia para aglutinar correlación de fuerza y alianzas encaminadas a hacer de Nicaragua un país estable, en ruta del desarrollo sustentable y democrático.

* Lina Pohl es la Directora de la Oficina de la Heinrich-Böll-Stiftung en El Salvador.

San Salvador, 5.12.2008